



Consejo de Seguridad

Distr. general
13 de septiembre de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 9 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1383 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Tengo el honor de referirme a mi carta de 14 de agosto de 2002 (S/2002/955).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido de la República Federativa de Yugoslavia el informe complementario adjunto presentado de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Jeremy **Greenstock**
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la
resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

Carta de fecha 4 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Representante Permanente de Yugoslavia ante las Naciones Unidas

Con referencia a su carta de 28 de mayo de 2002, tengo el honor de remitirle adjunta la información complementaria del informe de la República Federativa de Yugoslavia al Comité contra el Terrorismo sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (véase apéndice). Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Dejan **Sahovic**
Embajador
Representante Permanente

Apéndice

Información complementaria del informe de la República Federativa de Yugoslavia al Comité contra el Terrorismo sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas*

Apartado 1 a)

¿Podría Yugoslavia facilitar una reseña de las propuestas hechas por el Grupo de Trabajo interdepartamental para modificar la legislación de Yugoslavia a fin de armonizarla con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros convenios internacionales pertinentes?

La legislación para dar cumplimiento a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad y otros documentos internacionales pertinentes relativos a esta cuestión está todavía en preparación y se remitirá al Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad tan pronto como esté disponible.

Apartado 1 b)

Puesto que Yugoslavia ha firmado el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, ¿qué medidas tiene intención de tomar Yugoslavia para incluir los delitos correspondientes de la Convención en las diversas leyes de Yugoslavia?

El proyecto de ley para modificar la Ley Penal de la República Federativa de Yugoslavia, presentado a la Asamblea Federal para su aprobación, tipifica como delito penal la financiación del terrorismo. Se propone su inclusión con el fin de armonizar la legislación penal de Yugoslavia con esta Convención que ya ha sido firmada y ratificada. De conformidad con este proyecto de ley, este delito lo comete la persona que facilita o recauda fondos destinados a financiar el terrorismo, y está castigado con penas de prisión de uno a diez años.

La disposición del futuro artículo 155 g) “Financiación del terrorismo”, según el proyecto de ley para modificar la Ley Penal de la República Federativa de Yugoslavia dice así:

“Financiación del terrorismo

Artículo 155 g)

1) El que facilite o recaude fondos destinados a financiar la comisión de los delitos mencionados en los artículos 155 a), 155 b) ó 155 v) será castigado con pena de prisión de uno a diez años.

2) Los fondos mencionados en el párrafo 1 de este artículo serán confiscados.”

Nota: El artículo 155 a) se refiere al terrorismo internacional, el artículo 155 b) a las amenazas a las personas protegidas internacionalmente y el artículo 155 v) a la toma de rehenes.

* Los anexos se encuentran disponibles en la Secretaría para su consulta.

Apartado 1 c)

¿Tiene Yugoslavia la intención de modificar su legislación para permitir la congelación de los fondos mantenidos en Yugoslavia por personas (incluidas en particular, las personas naturales, habida cuenta de que la aplicación del artículo 210 de la Ley de enjuiciamiento penal se limita actualmente a las personas jurídicas) y entidades fuera de Yugoslavia que estén implicadas en actividades terroristas fuera de Yugoslavia?

La República Federativa de Yugoslavia promulgará en un futuro próximo leyes que incluyan las disposiciones correspondientes para sancionar los delitos mencionados.

¿Qué obligaciones de vigilancia y denuncia se aplican a los intermediarios financieros (incluidas las personas ajenas al sector financiero propiamente dicho, como los abogados) con el fin, en particular, de prevenir las transacciones económicas y financieras con fines terroristas u otros fines criminales (como cuestión distinta de la identificación del producto de la actividad ilícita)? ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de estas obligaciones? ¿Se han impuesto ya algunas penas?

Se ha establecido la Comisión Federal para la Prevención del Blanqueo de Dinero con el fin de hacer cumplir la Ley sobre el blanqueo de dinero (*Gaceta Oficial de la República Federativa de Yugoslavia* No. 53/2001) que entró en vigor el 1º de julio de 2002. En este contexto, se ha previsto la creación del Departamento para combatir la financiación del terrorismo. El reglamento sobre la organización interna y clasificación de puestos de dicha Comisión prevé una plantilla de ocho funcionarios que se encargarán de los análisis y estudios, así como del trabajo técnico y operativo de las transacciones relacionadas con la financiación del terrorismo. La tarea del Departamento consiste en determinar si ciertas transacciones financieras concretas permiten sospechar que implican blanqueo de dinero para la financiación del terrorismo, a fin de que puedan tomarse las medidas adecuadas contra las personas implicadas en estas transacciones.

Apartado 1 d)

Sírvase explicar cómo se espera que la nueva Ley de enjuiciamiento penal logre los objetivos concretos de este apartado. Sírvase facilitar una reseña de las disposiciones pertinentes y un informe sobre la situación relativa a su promulgación y aplicación

La nueva Ley de enjuiciamiento penal, que entró en vigor en marzo de 2002 incluye una nueva disposición en su artículo 234 que autoriza al juez de instrucción, si hay razones para creer que se ha cometido un delito castigado con pena de prisión de diez o más años, a ordenar, a petición del fiscal, de una organización bancaria, financiera o de otro tipo, que se facilite información acerca de las cuentas de las empresas o las personas. Se espera que esta nueva disposición permita la detección de delitos de financiación del terrorismo.

En diciembre de 2001, el Gobierno Federal solicitó al Ministerio Federal de Finanzas y al Ministerio Federal de Justicia, así como a otros departamentos competentes que investigasen la posibilidad de preparar una ley federal para regular de manera exhaustiva la adopción de medidas contra la delincuencia organizada y el terrorismo internacional, en particular en materia financiera.

¿Qué medidas de control y vigilancia existen para garantizar que no se transfieran fondos destinados a la financiación del terrorismo a través de organizaciones caritativas, religiosas o culturales?

Sírvase indicar las medidas e instrumentos disponibles para reglamentar las disposiciones alternativas sobre transferencia de fondos, incluido el sistema conocido como Hawala.

La Ley de Donaciones y Ayuda Humanitaria (*Gaceta Oficial de la República Federativa de Yugoslavia* Nos. 53/2001 y 61/2001) reglamenta el procedimiento para la recepción de donaciones de ayuda humanitaria desde el extranjero, los beneficios recibidos en forma de donaciones y ayudas, así como las sanciones por proporcionar información falsa para obtener estos beneficios, por el uso indebido de las divisas recibidas en forma de donaciones y ayuda humanitaria y por obstaculizar la inspección de las mercancías, libros de contabilidad y otros documentos relativos a las donaciones y ayuda humanitarias recibidas (que pudieran utilizarse, en particular, para la financiación del terrorismo).

Apartado 2 a)

Sírvase reseñar las disposiciones legales que regulan la fabricación, venta, posesión, transporte y almacenamiento de armas en Yugoslavia.

La lista de disposiciones relativas a la fabricación y comercio de armas y equipo militar figura en el Apéndice 1.

Sírvase reseñar las disposiciones y procedimientos legales que regulan el comercio internacional de armas y explosivos.

De conformidad con las disposiciones de la Ley sobre transporte de sustancias peligrosas (*Gaceta Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia*, Nos. 27/90 y 45/90), el Ministerio Federal del Interior es el encargado de expedir los permisos para el transporte de sustancias explosivas a través de las fronteras del Estado o en el interior del territorio de la República Federativa de Yugoslavia (importación, exportación, tránsito); estos permisos, que contienen información sobre el remitente, el fabricante, el transportista y el destinatario de las mercancías, así como instrucciones para el cumplimiento obligatorio de medidas especiales de seguridad, incluido un itinerario definido para el transporte con escolta de la policía.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley sobre fabricación y comercio de armamento y equipo militar (*Gaceta Oficial de la República Federativa de Yugoslavia*, No. 41/96) y con el artículo 4 del Reglamento sobre el transporte de armamento y equipo militar (*Gaceta Oficial de la República Federativa de Yugoslavia* No. 54/97), el Ministerio Federal del Interior es el encargado de expedir los permisos para el transporte de armamento y equipo militar a través del territorio de la República Federativa de Yugoslavia, sobre la base de un permiso expedido previamente por el Ministerio Federal de Defensa para el comercio de armamento y de equipo militar.

Los permisos para el transporte de armas y municiones a través de las fronteras del Estado, y en tránsito a través del territorio de la República Federativa de Yugoslavia, los expide el Ministerio Federal del Interior previa consulta con el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y el Ministerio Federal de Defensa, según lo dispuesto

en el artículo 30 de la Ley sobre el paso de fronteras y circulación en la zona fronteriza (*Gaceta Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia* No. 30/83).

Además, la importación y exportación de explosivos, armas y municiones que no estén destinados a su utilización por las fuerzas armadas, es decir que no estén clasificados como armamento y equipo militar, se lleva a cabo previo permiso expedido por el Ministerio Federal de Relaciones Económicas Exteriores, en el que se especifican todos los participantes en el comercio, de conformidad con la decisión de la Comisión Interdepartamental para la expedición de permisos de exportación e importación de armas deportivas y de caza y de munición y suministros para su fabricación, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de comercio exterior.

En todos los casos mencionados de comercio internacional de armas y explosivos se aplican medidas especiales de seguridad.

El Ministerio del Interior de la República de Serbia, dentro de su ámbito de competencia definido por la ley, lleva a cabo y supervisa la adecuada aplicación de las leyes y reglamentos, incluidos los reglamentos importantes para combatir eficazmente las actividades terroristas en lo referente a la fabricación y comercio de armas, municiones y explosivos. Además el Ministerio propone enmiendas a las leyes y reglamentos existentes, así como la promulgación de otros nuevos. Con el fin de mejorar el marco legislativo e institucional para combatir el terrorismo, el Ministerio propuso la promulgación de una ley especial contra el terrorismo, que tendrá en cuenta la experiencia de otros países europeos y de ultramar y que se ajustará a las directrices y objetivos de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el Apéndice 2 figuran las leyes y reglamentos de la República que regulan la fabricación y comercio de armas, municiones, explosivos, líquidos inflamables y gases.

Sírvase reseñar las medidas adoptadas, tanto legislativas como prácticas, para impedir que las entidades y personas contraten, recauden fondos o soliciten otras formas de ayuda para actividades terroristas dentro o fuera de Yugoslavia, en particular las siguientes:

- **Contratar, recaudar fondos y solicitar otras formas de ayuda de otros países, en Yugoslavia o desde Yugoslavia; y**
- **Prácticas fraudulentas, como contratar a una persona fingiendo una finalidad distinta (por ejemplo, la enseñanza) de la finalidad verdadera, y recaudación de fondos a través de organizaciones pantalla.**

Las medidas legislativas para impedir que las colectividades o personas contraten, recauden fondos o soliciten diversas formas de ayuda para actividades terroristas, están reguladas por la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia, según se indica a continuación:

- Actividades terroristas y de sabotaje: artículos 125, 126 y 127;
- Envío y traslado al territorio de la República Federativa de Yugoslavia de grupos armados, armas y municiones: artículo 132;

- Actividades destinadas a violar la soberanía territorial: artículo 135;
- Asociación para llevar a cabo actividades hostiles: artículo 136;
- Preparación y comisión de las formas más graves de actos delictivos: artículo 138 y 139;
- Asistencia al autor de un acto criminal después de haberlo cometido: artículo 137;
- Terrorismo internacional: artículo 155 a);
- Amenazas a personas protegidas internacionalmente: artículo 155 b);
- Toma de rehenes: artículo 155 v).

La práctica ha confirmado que las rutas del tráfico ilícito de estupefacientes, trata de blancas, armas y otros medios de destrucción, así como las migraciones ilegales hacia Europa atraviesan el territorio de la República Federativa de Yugoslavia.

Los autores de estas actividades delictivas son autores potenciales de actividades terroristas.

En el marco de su compromiso general de participar en la lucha contra todas las formas de terrorismo, la República Federativa de Yugoslavia lleva a cabo actualmente sus operaciones para combatir las actividades terroristas solamente en su propio territorio, si bien estas operaciones afectan indirectamente las actividades en Europa y en el mundo.

¿De qué medios dispone Yugoslavia para controlar el establecimiento y las operaciones en su territorio de grupos paramilitares con capacidad para llevar a cabo actividades terroristas?

De conformidad con los reglamentos en vigor, se prohíbe cualquier forma de organización y operación paramilitar en el territorio de la República Federativa de Yugoslavia. Las fuerzas oficiales de seguridad del Estado de la República Federativa de Yugoslavia son el Ministerio del Interior y el Ejército. Habida cuenta del peligro de la posible formación de grupos y organizaciones paramilitares y/o terroristas, los Ministerios del Interior de la República de Serbia y de la República de Montenegro, en el marco de sus atribuciones y competencias legales, han incrementado sus actividades para controlar la creación y las operaciones de los grupos paramilitares con capacidad para llevar a cabo actividades terroristas. Con el fin de prevenir cuanto antes la organización y actividades de grupos paramilitares, los departamentos de los ministerios competentes proceden a un seguimiento continuo de las actividades de los grupos que presentan un riesgo potencial, y se analiza toda la información disponible como base para la planificación y orientación de las actividades de los ministerios.

Teniendo en cuenta la experiencia internacional por lo que respecta a las relaciones entre el terrorismo y la delincuencia organizada, el Ministerio del Interior de la República de Serbia, con su nueva dependencia orgánica, la Oficina para combatir la delincuencia organizada, procede a un seguimiento continuo de la actividad de las organizaciones criminales con el fin de detectar cualquier relación con actividades terroristas dentro o fuera del país. Se llevan a cabo sin cesar actividades para detectar y cerrar los canales utilizados para el contrabando organizado de mercancías,

estupefacientes, armas y mujeres objeto de trata de blancas, como fuentes más provechosas para financiar las actividades terroristas. El Ministerio presta especial atención a la detección de posibles vínculos entre la delincuencia organizada y la actividad de los grupos terroristas, que pueden ocultar sus actividades bajo el nombre de diferentes organizaciones humanitarias, religiosas o culturales, u oficinas comerciales representativas en nuestro país. Se llevan a cabo controles minuciosos de la actividad de estas organizaciones, de sus miembros y sus fuentes de financiación, con especial atención a la detección de posibles relaciones con la organización terrorista Al-Qaida. Otra amenaza para la seguridad de la República Federativa de Yugoslavia y toda la región es la relación entre el terrorismo en Kosovo y Metohija y en Serbia meridional y la delincuencia organizada en el comercio de estupefacientes, explosivos, armas, municiones y mujeres objeto de trata de blancas, como indican los resultados de las actividades llevadas a cabo por el Ministerio. Se trata de un vínculo muy estrecho de dimensiones internacionales, ya que el adiestramiento, la compra de armas y equipo, así como las actividades terroristas llevadas a cabo en el territorio de Kosovo y Metohija están financiadas en gran parte con los impuestos cobrados a todos los albaneses empleados en Europa occidental, así como con el producto del tráfico de estupefacientes a cargo de la mafia albanesa, una de las mafias mejor organizadas del mundo. A este respecto, cabe destacar que la Asamblea de la República de Serbia aprobó la Ley sobre la organización de competencias de los organismos gubernamentales para combatir la delincuencia organizada y la Ley sobre el Organismo de seguridad e información (*Gaceta Oficial de la República de Serbia*, No. 42/2002).

Apartado 2 b)

Sírvase describir los mecanismos y procedimientos disponibles para facilitar una alerta temprana a los Estados sobre los terroristas y los actos de terrorismo.

Se intercambia la información pertinente con otros países y organizaciones a través de la Oficina nacional central de Interpol, que actúa en el marco de la Oficina de policía criminal del Ministerio Federal del Interior de la República Federativa de Yugoslavia. De esta forma, y de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, otros Estados pueden recibir una alerta temprana sobre el riesgo que presentan los terroristas y sus actividades. Además, esta información puede distribuirse a otros miembros de la comunidad internacional a través de los conductos diplomáticos pertinentes.

En la respuesta al apartado 2 e) se indica que la legislación yugoslava no prevé la sanción de los grupos terroristas. En este contexto, sírvase aclarar si la definición de “asociación selectiva” en la legislación penal de Yugoslavia incluye específicamente los grupos terroristas.

Según se indicaba en nuestro informe anterior, el establecimiento de grupos terroristas no está sancionado en la legislación yugoslava como un acto criminal en sí mismo. Sin embargo, las disposiciones generales sobre responsabilidad penal disponen el castigo de los organizadores de asociaciones criminales (artículo 26 de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia). Concretamente, una persona que para cometer un acto criminal utilizase una organización, pandilla, asociación para delinquir, grupo u otra asociación, será responsable de todos los actos criminales que resulten de las actividades delictivas de estas asociaciones y será castigada como si la propia

persona hubiera cometido estos actos, independientemente de en qué concepto hubiera participado esa persona en la comisión de alguno de estos actos. Los grupos terroristas quedarían incluidos sin duda en la definición de asociación criminal.

Sin embargo, si esta asociación criminal (por ejemplo, un grupo terrorista) no ha cometido ningún delito, el organizador será responsable de conformidad con el artículo 254 de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia (“Asociación para cometer actos delictivos previstos en la Ley Federal”). De acuerdo con esta disposición, una persona que organice un grupo para cometer actos delictivos sancionados en la Ley Federal con pena de prisión de cinco o más años, será castigada con pena de prisión de tres meses a cinco años, a menos que la Ley Federal establezca una pena de prisión mayor para esta organización.

Sírvase hacer una reseña detallada del artículo 125 de la Ley penal (relativo al terrorismo contra el Estado) y de los artículos 155 a), 155 b) y 155 c) (relativos al terrorismo internacional).

Los actos criminales del terrorismo mencionados en el artículo 125 constituyen una forma de terrorismo interno, contra el Estado, en tanto que los delitos mencionados en los artículos 155 a), 155 b) y 155 v) representan una forma de terrorismo internacional que incluye elementos de carácter extranjero.

La comisión del delito de terrorismo mencionado en el artículo 125 de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia implica la realización de un acto que supone un riesgo general, por ejemplo provocar una explosión o un incendio, como actos típicos. La segunda forma de este delito implica un acto de violencia. Lo que define además este tipo de delito es que en ambas modalidades debe haber una estrecha relación de causa a efecto, es decir que deben provocar un sentimiento de inseguridad entre los ciudadanos. Este sentimiento de inseguridad constituye una apreciación subjetiva, que se manifiesta sobre todo en un sentimiento de temor y peligro. Además del acto y sus consecuencias, para que exista una acción criminal es necesario que el acto se haya realizado con intención de poner en peligro el orden constitucional o la seguridad de la República Federativa de Yugoslavia. Este elemento subjetivo da al acto criminal una dimensión política, en lo que difiere de otros actos criminales que pueden implicar también una acción generalmente peligrosa o violenta.

Este acto está castigado con pena de prisión de tres a 15 años. Si el acto provoca la muerte de una o más personas, o pone en peligro las vidas humanas, o va acompañado de violencia masiva o destrucción extensa, o tiene como consecuencia una amenaza a la seguridad, el poder económico o militar del país, su autor será castigado con una pena mínima de prisión de 10 años, y si durante la comisión del delito, el autor hubiese dado muerte intencionalmente a una o más personas será castigado con una pena de prisión mínima de 10 a 40 años. El mismo castigo se prevé para el que cometiese este acto durante un estado de guerra o en caso de amenaza inminente de guerra.

En cuanto al terrorismo internacional, la legislación penal yugoslava distingue entre terrorismo internacional en sentido estricto y en el sentido más amplio el término. El terrorismo internacional en sentido estricto incluye los delitos especificados en los artículos 155 a), 155 b) y 155 v) de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia.

La tipificación del delito de terrorismo internacional (artículo 155 a) de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia) se basa en la Convención Europea para la Represión del Terrorismo, de 1977, aunque en el momento de su reglamentación Yugoslavia aún no había ratificado esta Convención¹. El acto delictivo previsto en este artículo se basa en la definición más estricta de terrorismo, es decir que se exige la existencia de una intención de hacer daño a un Estado extranjero al cometerlo. Este acto reviste una forma básica y dos formas más graves. La forma básica de este delito incluye: a) el secuestro de una persona o la comisión de otro acto de violencia; b) provocar una explosión o incendio; c) poner en peligro vidas humanas o bienes de gran valor. Este delito en su forma básica está castigado con una pena mínima de un año de prisión (pena máxima de 15 años). El castigo previsto para el delito en su forma calificada mencionada en el párrafo 2, que se produce cuando el acto provoca la muerte de una o más personas, es de pena de prisión mínima de cinco años (máxima de 15 años), y en la forma más grave prevista en el párrafo 3, que se produce cuando el autor da muerte intencionadamente a una persona, el castigo es de pena de prisión de 10 a 40 años.

La base legal internacional para sancionar los actos criminales o las amenazas a personas protegidas internacionalmente mencionados en el artículo 155 b) de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia es la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, ratificada por Yugoslavia en 1976 (*Gaceta Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia - Tratados internacionales*, No. 54/76). Este acto reviste diversas formas. Este delito en su forma básica, se define como: a) secuestro u otro acto de violencia contra una persona internacionalmente protegida o b) ataque contra edificios oficiales, residencia privada o vehículo de una persona internacionalmente protegida. Este acto está castigado con una pena de prisión mínima de un año (máximo de 15 años). El castigo por la forma más grave del acto mencionado en el párrafo 2 de este artículo, que tiene lugar cuando el acto provoca la muerte de una o más personas, es una pena de prisión mínima de 10 años y máxima de 40 años. La forma menos grave de este delito, prevista en el párrafo 4, implica una amenaza grave de cometer una de las acciones mencionadas en el párrafo 1 y está castigada con pena de prisión de uno a 10 años.

Una forma especial de terrorismo internacional en su sentido más amplio es la toma de rehenes, que en nuestra legislación está tipificada como delito en el artículo 155 v) de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia. La obligación de tipificar como delitos estos actos emana de la Convención Internacional contra la toma de rehenes, ratificada por Yugoslavia en 1984 (*Gaceta Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia - Tratados internacionales*, No. 9/84). El sujeto pasivo, o sea el objeto de la acción criminal, es la persona secuestrada, es decir el rehén, en tanto que el sujeto protector es un Estado extranjero o una organización internacional. La comisión de este delito se define de manera cumulativa, es decir que implica dos actos: secuestro y amenaza. Se trata de una amenaza cualificada, por cuanto la persona secuestrada se enfrenta a la perspectiva de resultar muerta, lesionada o quedar mantenida como rehén a menos que se cumplan ciertas condiciones. Esta amenaza se dirige más bien a la persona secuestrada al Estado o a una organización internacional que se ve obligada a hacer algo. Esta forma de delito está

¹ La Convención Europea para la Represión del Terrorismo fue ratificada en noviembre de 2001 (*Gaceta Oficial de la República Federativa de Yugoslavia*, No. 10/2001) y entrará en vigor para nuestro país tres meses después del depósito de los instrumentos de ratificación.

castigada con una pena de prisión mínima de un año (máxima de 15 años). En cuanto al delito agravado a que se refiere el párrafo 2, que se produce cuando el autor da muerte intencionadamente a la persona secuestrada, el castigo previsto es una pena de prisión de 10 a 40 años.

En ciertas condiciones, los siguientes actos pueden quedar también incluidos entre los delitos relacionados con el terrorismo internacional en su sentido más amplio: secuestro de aeronaves (artículo 240 de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia), poner en peligro la seguridad del vuelo (artículo 241), adquisición y utilización no autorizadas de material nuclear (artículo 247 a)), y poner en peligro la seguridad de material nuclear (artículo 247 b)). La base de estas figuras delictivas se encuentra en las siguientes convenciones de las Naciones Unidas: que ya han sido ratificadas: Convenio sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de las aeronaves, de 14 de marzo de 1963 (*Gaceta Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia* No. 47/70); Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, de 16 de diciembre de 1970 (*Gaceta Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia* No. 33/72); Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, de 23 de septiembre de 1971 (*Gaceta Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia* No. 33/72) y Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, concertada en Viena en 1979.

Apartado 2 c)

Sírvase reseñar las disposiciones legales que se refieren a la concesión de asilo a los extranjeros, en particular las que disponen que se niegue un refugio seguro a los terroristas.

La cuestión del asilo se rige por las siguientes disposiciones:

- La Ley sobre la circulación y residencia de extranjeros, *Gaceta Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia* No. 58/80, 53/85, 30/89, 26/90, 53/91 y *Gaceta Oficial de la República Federativa de Yugoslavia* No. 24/94, 28/96 (artículos 44 a 49);
- El reglamento sobre la expedición de documentos de viaje y visados a los extranjeros y forma de estos documentos y visados, *Gaceta Oficial de la República Federativa de Yugoslavia*, No. 44/81 (artículo 46 a 48).

De conformidad con las disposiciones de la mencionada ley, el derecho de asilo en la República Federativa de Yugoslavia se concede a un extranjero que sufra persecución por sus opiniones y actividades democráticas, en favor de la liberación social y nacional, de las libertades y derechos humanos o de la libertad de creatividad científica y artística.

El extranjero que solicite asilo debe presentar una solicitud para que se le conceda este derecho, personalmente o a través de los órganos de la República encargados de expedir los documentos de viaje y visados a los extranjeros, o a través de las oficinas diplomáticas y/o consulares de la República Federativa de Yugoslavia en el extranjero. La solicitud también puede revestir la forma de un escrito. El órgano competente que reciba la solicitud de asilo del extranjero verificará las declaraciones contenidas en la solicitud y remitirá esta solicitud, juntamente con su dictamen, al Ministerio Federal del Interior a través de los ministerios del interior de las repúblicas.

Si de los datos disponibles sobre el solicitante se desprendiera o si surgiera sospechas razonables durante la tramitación de la solicitud, de que el solicitante tenía la intención de actuar contra la República Federativa de Yugoslavia, los servicios de seguridad competente serán informados al respecto.

El extranjero al que se reconoce el derecho de asilo recibe alojamiento (utilización de un apartamento adecuado o fondos para pagar el alojamiento), así como fondos para su mantenimiento y protección sanitaria. Los recursos para estos fines se proporcionan con cargo al presupuesto federal. La Secretaría federal del trabajo, sanidad y asistencia social es la encargada de reglamentar estos derechos del extranjero a los que se ha reconocido el derecho de asilo. El Ministro Federal del Interior está facultado para decidir acerca del reconocimiento y revocación del derecho de asilo.

A propuesta del Ministerio Federal del Interior de la Secretaría Federal de Trabajo, Salud y Bienestar Social, el Gobierno Federal decide, caso por caso, la cuantía de los fondos necesarios para el mantenimiento de un extranjero al que se ha reconocido el derecho de asilo, así como la cobertura de la protección sanitaria, los criterios y condiciones para la utilización y la forma de ejercer esta protección.

Al extranjero al que se ha reconocido el derecho de asilo también se le concede el derecho de residencia permanente en la República Federativa de Yugoslavia.

Si, después de haberse reconocido el derecho de asilo, apareciese información con arreglo a la cual se habría denegado el derecho de asilo, o si se sospecha que el extranjero actúa contra los intereses de la República Federativa de Yugoslavia o que lleva a cabo actividades perjudiciales para los intereses internacionales del país, se iniciará un procedimiento para revocar el derecho de asilo.

La decisión acerca de la revocación del derecho de asilo especifica el plazo en que el extranjero debe abandonar el territorio de la República Federativa de Yugoslavia. Este plazo no podrá ser inferior a 30 días ni superior a seis meses. El extranjero puede presentar un recurso ante el Gobierno Federal contra la decisión de denegar el derecho de asilo y contra la decisión de revocar este derecho. La decisión adoptada sobre este recurso no podrá ser objeto de un contencioso administrativo.

La Ley sobre la circulación y residencia de extranjeros se refiere también a la cuestión del asilo. Sin embargo, en el contexto de la armonización con las normas de la Unión Europea, se ha creado un Grupo de trabajo en el Ministerio Federal del Interior que preparó el proyecto de ley sobre la circulación y residencia de extranjeros y el proyecto de ley sobre el asilo y lo remitió para su ulterior examen.

El proyecto de ley sobre el asilo dispone que se negará el derecho de asilo a una persona que reúne los requisitos para obtener el estatuto de refugiado si se demuestra que:

- Esta persona ha cometido un delito contra la paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad en el sentido del derecho internacional;
- Esta persona ha cometido un delito grave fuera del territorio de la República Federativa de Yugoslavia antes de ser admitida en la República Federativa de Yugoslavia como refugiado;

- Que es contrario a los intereses internacionales de la República Federativa de Yugoslavia, a las consideraciones de seguridad nacional y a la protección del orden público.

Sírvase aclarar si existen disposiciones en la legislación vigente que nieguen la entrada en Yugoslavia a personas como las mencionadas en el apartado 2 c) de la resolución, que no sean solicitantes de asilo.

La Ley sobre la circulación y residencia de extranjeros regula también el sistema de expedición de visados de la República Federativa de Yugoslavia.

Según las disposiciones del apartado 1) del párrafo 1 del artículo 25 de la Ley, no se concederá los visados, es decir, se negará la entrada a la República Federativa de Yugoslavia, a un extranjero que haya cometido un crimen de lesa humanidad y contra el derecho internacional.

Al extranjero que figure en los registros de la autoridad competente de la República Federativa de Yugoslavia como delincuente internacional se le negará la entrada en el país (apartado 5 del párrafo 1 del artículo 25).

El proyecto de ley sobre la circulación y residencia de extranjeros dispone que se negará la entrada en la República Federativa de Yugoslavia al extranjero que:

- Figure en el registro de extranjeros declarados persona *non grata* o en el registro de personas buscadas a nivel internacional, mantenidos por las autoridades competentes de la República Federativa de Yugoslavia;
- No sea un nacional del Estado extranjero cuyo documento de viaje ostenta, a menos que este documento de viaje declare expresamente que tiene derecho a regresar al Estado que expidió el documento de viaje o el visado;
- Si el extranjero facilitó datos falsos sobre su persona en la solicitud;
- En otros casos justificados, en particular si existen dudas razonables acerca de la identidad y/o la finalidad de la solicitud.

Teniendo en cuenta que la República Federativa de Yugoslavia como país de tránsito se presta a la migración de ciudadanos de países con amplia migración ilegal, las autoridades competentes están adoptando medidas para proteger las fronteras exteriores de la República Federativa de Yugoslavia.

Apartado 2 d)

Sírvase exponer las disposiciones de la legislación penal de Yugoslavia que prohíben la utilización del territorio de Yugoslavia para cometer actos terroristas fuera de Yugoslavia.

La legislación penal de la República Federativa de Yugoslavia no reconoce la utilización del territorio de Yugoslavia para cometer actividades terroristas fuera del país como un delito distinto, pero sus autores serían ciertamente perseguidos de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso.

Así, por ejemplo, según el artículo 253 de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia, “Conspiración para cometer un acto delictivo prohibido por la legislación federal”, una persona que conspire con otra para cometer un acto delictivo castigado con pena de prisión de cinco o más años (y los actos criminales de

terrorismo están cubiertos por la legislación federal y esta es la pena para estos actos) será castigada con pena de prisión de hasta un año. Según el artículo 254 de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia, “Asociación para cometer actos delictivos prohibidos por la legislación federal”, una persona que organice un grupo con el fin de cometer actos delictivos prohibidos por la legislación federal será castigada con pena de prisión de tres meses a cinco años, y los miembros de este grupo lo serán con pena de prisión de hasta un año.

Apartado 2 e)

¿Qué sanciones se aplicarán a los diferentes delitos previstos en las convenciones y protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo en virtud de las enmiendas que se están considerando para armonizar la legislación de Yugoslavia con la resolución?

Los castigos aplicables a los actos criminales de terrorismo se citan en la respuesta a los apartados 1 b) y 2 b).

¿Cuál es la competencia de los tribunales de Yugoslavia para juzgar los actos criminales de las siguientes categorías?

- **Un acto cometido fuera de Yugoslavia por un ciudadano o por otra persona que resida habitualmente en Yugoslavia (tanto si esa persona se encuentra actualmente en Yugoslavia como si no);**

En virtud del principio del estatuto personal, como uno de los principios básicos de la legislación penal yugoslava, únicamente tiene relevancia legal la nacionalidad yugoslava del autor del delito, y no el hecho de que el autor tenga una residencia permanente en el territorio de la República Federativa de Yugoslavia.

- **Un acto cometido fuera de Yugoslavia por un nacional extranjero que se encuentre actualmente en Yugoslavia**

Esta cuestión se rige por el artículo 107 de la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia, “Aplicabilidad de la legislación penal yugoslava a los extranjeros que cometan un delito en el extranjero”. Según el párrafo 1 de este artículo, la legislación penal yugoslava se aplica a un extranjero que cometa un delito contra nuestro país en el extranjero, o que cometa un delito contra un ciudadano de la República Federativa de Yugoslavia. El párrafo 2 de este mismo artículo establece las condiciones en que se aplica el principio general. Según esta disposición, la legislación yugoslava se aplica también a un extranjero que cometa en el extranjero un delito contra un país extranjero o un nacional extranjero castigado por la legislación yugoslava con pena de prisión de cinco o más años (se desprende de las respuestas a las anteriores preguntas que los delitos de terrorismo corresponden a esta categoría de delitos). Las condiciones para la aplicación del principio general son que el autor se encuentre fuera de nuestro territorio, que no sea extraditado a un país extranjero y que el acto cometido sea punible de conformidad con la legislación del país en que se ha cometido.

Apartado 2 f)

Sírvase reseñar las disposiciones concretas de la Ley de enjuiciamiento penal relativas a la asistencia mutua en la investigación de los delitos y en las actuaciones penales.

La asistencia judicial internacional en cuestiones penales está regulada en un capítulo distinto de la Ley de enjuiciamiento penal. Según esta Ley, los tratados internacionales tendrán prioridad para prestar ayuda judicial internacional, y si no se ha concertado un tratado internacional con un país determinado o si la cuestión no está regulada por un tratado internacional, se prestará la asistencia judicial internacional de acuerdo con las disposiciones de dicha Ley.

Según la Ley de enjuiciamiento penal, la asistencia judicial implica primordialmente asistencia legal en sentido estricto (entrevistas con el acusado, testigos y expertos, instrucción previa, registro de locales y personas, confiscación de objetos y presentación de documentos, material escrito y otros objetos en relación con las actuaciones penales llevadas a cabo en el Estado solicitante), así como formas especiales de asistencia judicial reguladas también por esta Ley, como la extradición, cesión y asunción del proceso penal y ejecución de las decisiones de los tribunales en relación con las penas. Todas estas formas de asistencia judicial se llevan a cabo sobre la base de la reciprocidad. Para la prestación de asistencia judicial internacional, el órgano encargado de la comunicación con la parte yugoslava según la Ley es el Ministerio Federal de Justicia.

La prestación de asistencia judicial en su sentido estricto no está regulada con detalle y, como en el caso de las formas especiales de asistencia mencionadas, puede resumirse en la forma siguiente:

Por lo que respecta a la ejecución de los fallos de un tribunal extranjero en un proceso penal, la Ley dispone que el tribunal nacional ejecutará la pena dictada por un tribunal extranjero si así se especifica en un tratado internacional, o sobre la base de la reciprocidad y si la pena ha sido impuesta por un tribunal nacional de conformidad con la legislación penal de la República Federativa de Yugoslavia. Además, si un nacional extranjero ha sido condenado por un tribunal nacional, o si una persona autorizada por un tratado presenta una solicitud para que la persona condenada cumpla sentencia en su país de origen, el juez que conozca del caso en primera instancia actuará de conformidad con el tratado internacional o según el principio de reciprocidad.

Si el delito ha sido cometido en el territorio de la República Federativa de Yugoslavia por un extranjero que resida en un país extranjero, el enjuiciamiento penal puede ser objeto de una inhibitoria en favor de ese otro Estado si el Estado extranjero no plantea objeciones. La inhibitoria sólo se permite en el caso de delitos sancionados con pena de prisión inferior a diez años, así como por actos delictivos que pongan en peligro el tráfico público. Si la parte lesionada es un nacional yugoslavo, no se permitirá la inhibitoria si la parte lesionada pone objeciones, a menos que se haya concedido como una garantía para ejercer su propia reclamación de bienes.

Los requisitos legales para conceder la extradición son los siguientes: 1) que la persona cuya extradición se solicita no sea un nacional yugoslavo; 2) que el acto por el que se solicita la extradición no se haya cometido en el territorio de la República Federativa de Yugoslavia, contra la República o sus ciudadanos; 3) que el acto por el que se solicita la extradición constituya un delito de conformidad tanto con la

legislación yugoslava como con la ley del país en que se ha cometido; 4) que no haya habido prescripción según la legislación yugoslava para entablar el proceso o para la ejecución de la pena, o que el acto en cuestión no haya sido objeto de amnistía; 5) que el extranjero cuya extradición se solicita no haya sido ya condenado por el mismo delito por el tribunal nacional o absuelto por el tribunal nacional, a menos que se den las condiciones para un nuevo proceso fijadas por la Ley o que no se haya iniciado un proceso penal en la República Federativa de Yugoslavia contra el extranjero por el mismo delito cometido contra la República Federativa de Yugoslavia, y en el caso de que se haya entablado el proceso por un acto cometido contra un nacional yugoslavo, que se hayan ofrecido garantías para ejercitar la reclamación legal de bienes; 6) que se haya determinado la identidad de la persona; y 7) que haya pruebas suficientes para sospechar razonablemente que el extranjero cuya extradición se solicita ha cometido ese delito o que existe efectivamente una decisión de los tribunales.

Sírvase facilitar una lista de países con los que Yugoslavia ha concertado acuerdos multilaterales de asistencia mutua.

Yugoslavia ha firmado 34 acuerdos bilaterales sobre asistencia judicial mutua con 25 países. Se han concertado estos acuerdos bilaterales con los siguientes países: Albania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia (aplicable tanto a la República Checa como a Eslovaquia), Dinamarca, Francia, Grecia, Países Bajos, Croacia, Iraq, Italia, Chipre, Alemania, Polonia, Rumania, Hungría, Mongolia, Federación de Rusia (antigua URSS), Estados Unidos de América, España, Suiza, Turquía y Reino Unido.

Apartado 3 c)

El Comité del Consejo le agradecería un informe sobre los progresos de la labor del Grupo de Trabajo de expertos sobre el terrorismo mencionado en el informe.

Debido al intenso trabajo de preparación de la Carta Constitucional, que debe regir las relaciones entre Serbia y Montenegro, el Grupo de Trabajo de expertos, es decir el Consejo contra el Terrorismo, se estableció oficialmente en virtud de la decisión del Gobierno Federal de la República Federativa de Yugoslavia el 1º de agosto de 2002. El Ministro Federal del Interior ha sido designado Presidente de este órgano, y el Ministro Federal de Defensa Vicepresidente. En consecuencia, cabe prever que en el futuro se intensificarán las actividades del Consejo, de las que se mantendrá informado al Comité.

El Comité le agradecería que facilitase una lista de los tratados y acuerdos multilaterales y bilaterales relacionados con la asistencia mutua en cuestiones penales en los que Yugoslavia es parte.

La lista de tratados y acuerdos figura en el Apéndice 3.

Apartado 3 d)

Al Comité le gustaría recibir un informe, en relación a las convenciones y protocolos internacionales pertinentes relacionados con el terrorismo, sobre los progresos realizados por Yugoslavia para:

• **Adherirse a los instrumentos en los que todavía no es parte; y**

La Asamblea Federal de la República Federativa de Yugoslavia ratificó la Convención Europea para la Represión y la Financiación del Terrorismo el 1° de julio de 2002, y el 2 de julio de 2002 ratificó la Convención sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito, aprobada por el Consejo de Europa de 8 de noviembre de 1990.

Además de la Convención Europea para la Represión del Terrorismo ya ratificada, está en proceso de ratificación el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, en tanto que se ha iniciado el proceso de ratificación del Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección.

• **Promulgar leyes y adoptar otras disposiciones necesarias para aplicar los instrumentos en que es parte.**

La ratificación de estas convenciones irá seguida de la promulgación de las leyes y otras disposiciones necesarias para su aplicación.

Apartado 3 e)

El Comité desearía disponer de un informe sobre la situación por lo que respecta a la promulgación y aplicación de las enmiendas a la Ley penal mencionadas en relación con este apartado.

El proyecto de ley para enmendar la Ley penal de la República Federativa de Yugoslavia se encuentra todavía en tramitación en el Parlamento, y se espera que su promulgación tenga lugar en breve.

Apartado 3 f)

¿Existe alguna disposición similar al artículo 12 de la Ley sobre la nacionalidad que restrinja la residencia permanente en Yugoslavia de personas de este tipo a las que este artículo niega la nacionalidad?

De conformidad con el artículo 12 de la Ley sobre la nacionalidad yugoslava (*Gaceta Oficial de la República Federativa de Yugoslavia*, Nos. 33/96 y 9/01) y con las disposiciones de los artículos 12a y 26 de la Ley, se excluye la posibilidad de conceder la nacionalidad yugoslava a un extranjero casado con una nacional yugoslava al que se ha concedido residencia permanente en el República Federativa de Yugoslavia, o a una persona a la que se ha revocado la nacionalidad yugoslava y que ha permanecido en territorio yugoslavo durante un año al menos y su conducta permite llegar a la conclusión de que no respetarían el orden jurídico de la República Federativa de Yugoslavia.

Además, el artículo 48 de la Ley dispone que a un nacional de uno de los nuevos Estados surgidos en el territorio de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, que permanezca en el territorio de la República Federativa de Yugoslavia en calidad de refugiado, persona expulsada o desplazada, o a un nacional de la República Federativa Socialista de Yugoslavia que no tenga la nacionalidad de uno de los nuevos Estados no se le concederá la nacionalidad yugoslava si los intereses de seguridad, defensa o situación internacional de la República Federativa de Yugoslavia así lo exigen.

Otros asuntos

¿Podría Yugoslavia facilitar un organigrama del mecanismo administrativo, por ejemplo, policía, control de inmigración, aduanas, autoridades fiscales y de supervisión financiera, establecido para aplicar las leyes, reglamentos y otros documentos que contribuyen al cumplimiento de la resolución?

El ámbito de competencia del Ministerio del Interior (MUP) de la República de Serbia se define en el artículo 3 de la Ley sobre los ministerios, según el cual el Ministerio del Interior desempeña las tareas de la administración del gobierno relacionadas con la protección de la seguridad de la República de Serbia y la detección y prevención de actividades destinadas a socavar o derrocar el orden constitucional, la protección de la vida, la seguridad personal y de los bienes de los ciudadanos; la represión y detección de actos delictivos y la búsqueda y detención de los autores de los delitos y su entrega a las autoridades competentes; la guarda de ciertas personas e instalaciones; la seguridad del tráfico vial; el control de los pasos fronterizos; el control de la circulación y permanencia en la zona fronteriza; el control de la circulación y permanencia de extranjeros; la adquisición, posesión y porte de armas y munición; la producción y el comercio de sustancias explosivas, líquidos inflamables y gases; la protección contra incendios; la nacionalidad; el número del documento personal de identidad, tarjetas de identidad, documentos de viaje, domicilio y residencia de los ciudadanos; la capacitación; la toma de decisiones en segunda instancia del procedimiento administrativo sobre la base del reglamento sobre los refugiados, así como otras funciones definidas por la ley.

Los aspectos principales de la organización interna y la clasificación de puestos en el Ministerio del Interior de la República de Serbia los define el Gobierno de la República de Serbia. La organización interna y la clasificación de puestos en el Ministerio del Interior de la República de Serbia están regulados en virtud de una decisión dictada por el Ministro del Interior con la anuencia del Gobierno.

La organización del Ministerio del Interior de la República de Serbia se define en el reglamento sobre la organización interna del Ministerio del Interior de la República de Serbia que regula las dependencias orgánicas del Ministerio, su ámbito de competencia, organización y sede y zonas bajo su jurisdicción, la forma de gestión de las dependencias orgánicas y la forma en que ha de llevarse a cabo la programación, planificación y ejecución de las tareas en el Ministerio. De acuerdo con este reglamento, el trabajo y la gestión del Ministerio se organizan según los principios horizontal-vertical y territorial, a través del Departamento de Seguridad Pública y las dependencias orgánicas territoriales: 33 Secretarías del Interior (SUP), que incluyen 126 oficinas del interior (OUP) y 31 comisarías de policía (PS).

Dentro del ámbito del Departamento de Seguridad Pública en la sede del MUP hay 13 dependencias orgánicas (10 Oficinas, el Centro operacional, una Dependencia especial antiterrorista y la Gendarmería). Las Oficinas de la sede son la Oficina de Policía Criminal, la Oficina de Policía, la Oficina de Policía de Tráfico, la Oficina de Policía Fronteriza de Extranjeros y Asuntos Administrativos (que incluye los 37 puestos de policía fronterizos - SPPs), la Brigada contra Incendios, la Oficina Analítica, la Oficina de Información, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina de Servicios Generales y la Oficina de Alojamiento.

Las siguientes dependencias orgánicas actúan al margen del Departamento: la Oficina del Ministro, la Oficina para combatir la Delincuencia Organizada, el Inspector General del Departamento de Seguridad Pública, el Inspector General del Departamento de Seguridad del Estado, la Dependencia de Operaciones Especiales (JSO), la Unidad de Helicópteros, la Oficina Normativa y de Asuntos Jurídicos, el Instituto de Seguridad, el Colegio del Interior y la Escuela Secundaria del Interior.

La fuerza regular de policía es la división más numerosa del Ministerio del Interior. Su ámbito de actuación se define por ley e incluye fundamentalmente las tareas relacionadas con la seguridad de las personas y los bienes, el mantenimiento del orden público y la paz, la seguridad del tráfico vial, y el control de los pasos fronterizos. La naturaleza de estas tareas está definida por sus títulos respectivos: Policía General, Policía Criminal, Policía de Tráfico, Policía Fronteriza y Brigada contra Incendios.

Fuerza especial de policía

La fuerza especial de policía cuenta con las siguientes dependencias: Dependencia Especial Antiterrorista (SAJ), Gendarmería, Dependencia de Operaciones Especiales (JSO) y Unidad de Helicópteros.

Dependencia Especial Antiterrorista

Desempeña las tareas relacionadas con la protección de la seguridad de la República de Serbia y sus ciudadanos, en particular en situaciones de secuestro de aeronaves y otros medios de transporte, rehenes, levantamiento de barricadas, actos de sabotaje-terrorismo, grupos de delincuentes y otros grupos de personas peligrosas y demás situaciones que impliquen resistencia y utilización de armas de fuego.

Gendarmería

Es la dependencia operacional básica del Departamento de Seguridad Pública, y se encarga de planificar, organizar y llevar a cabo las tareas más complejas de seguridad en casos tales como incursiones y organización de grupos de sabotaje-terrorismo y grupos peligrosos de delincuentes; rebelión en las prisiones, detención de delincuentes peligrosos, restablecimiento del orden público y la paz en los casos de alteraciones en gran escala; seguridad de las reuniones públicas de alto riesgo, asistencia en casos de peligro general y eliminación de las consecuencias de los desastres naturales, así como otras funciones y tareas dentro del ámbito de competencia del Departamento.

Dependencia de Operaciones Especiales (JSO)

Lleva a cabo las tareas y funciones relacionadas con la represión de los actos terroristas y de sabotaje por parte de organizaciones, grupos o personas en el país o en el extranjero; desempeña funciones de rescate, ayudando a los ciudadanos cuyas vidas o propiedades están en peligro y realiza otras tareas en los casos en que el interés y la seguridad del país así lo exigen.

Unidad de Helicópteros

Lleva a cabo las tareas relacionadas con intervenciones directas y asistencia para proteger al Estado y sus ciudadanos, en particular la detección y aprehensión de

terroristas, grupos o personas proscritos u otros grupos o personas criminales, detención de delincuentes peligrosos, restablecimiento del orden público y la paz en caso de alteraciones en gran escala, control del tráfico, contención y extinción de incendios, funciones de rescate en caso de hallarse en peligro vidas y propiedades; y desempeña otras tareas en los casos en que el interés de la seguridad del país así lo exige.

El organigrama del Ministerio del Interior de la República de Serbia se facilita en el apéndice 4².

² Habida cuenta de sus competencias y del ámbito de su labor, los ministerios de las Repúblicas son los que tienen mayor trabajo, funciones y responsabilidades para combatir el terrorismo. Por esta razón, en vez del organigrama del Ministerio Federal del Interior, presentamos como representativa la organización del Ministerio del Interior de la República de Serbia, que cubre y es responsable de la seguridad de la mayor parte del territorio de la República Federativa de Yugoslavia.